



SALA UNIPERSONAL DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	Verbal – responsabilidad civil extracontractual
DEMANDANTES	Pedro Montoya González y otros
DEMANDADOS	María Luz Elda Montoya Giraldo y otros
RADICADO	05266 31 03 002 2022 00125 01
DECISIÓN	Confirma auto apelado

Medellín, tres de marzo de dos mil veintitrés

El Despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

1.1. En providencia de 1 de julio de 2022 el Juzgado 002 Civil del Circuito de Envigado rechazó la demanda formulada por Pedro Montoya González y otros, frente a María Luz Elda Montoya Giraldo y otros. Como fundamento de la decisión, consideró que el extremo procesal activo no subsanó los requisitos exigidos en providencia de 16 de mayo de la misma anualidad. En este sentido, sostuvo que a los promotores de la demanda se les exigió indicar los conceptos por los cuales solicitaban el pago de unas cantidades de dinero, todas distintas, contenidas en la pretensión segunda, literal A de la demanda, pues ni allí ni en los hechos se precisó por qué conceptos se debía hacer dichos pagos. A lo que respondieron que el concepto era la merma de la capacidad laboral y ocupacional de los demandantes, según la calificación de PCL, sin embargo, no explicaron de donde salían los valores que señalaron, ni dijeron cuál era el porcentaje de la merma de capacidad laboral de cada uno de ellos.

De igual modo, pidió a los accionantes determinar a cuál de los demandantes se debía hacer el pago de mejoras de la pretensión segunda, literal b, y cuál de los demandados debía hacerlo. A lo que contestaron que el pago debían hacerlo los accionados en el mismo porcentaje a que tenían derecho como herederos en la sucesión, empero, no expuso a cuál sucesión se refería, ni anotó los porcentajes a que los demandados en dicha sucesión tenían derecho.

Por otro lado, requirió a los gestores de la demanda para que consignaran el porcentaje en que cada uno de los demandados incidió en la alteración de la

salud mental de los accionantes y, en consecuencia, cuál era el porcentaje en que cada uno de los demandados debía participar en la indemnización que se pide. A lo que los gestores de la demanda adujeron que cada uno de los demandados debía responder en la misma proporción a sus derechos en la sucesión, lo que era inadmisibles, pues de los hechos de la demanda se desprendería que no todos los demandantes habían sufrido el mismo perjuicio y, no todos los demandados tendrían igual responsabilidad, pues de tales hechos se infería que, al menos, dos personas fueron las que más ejercieron actos agresivos en contra de los demandantes, por lo que debía explicarse en forma clara cuál era el grado de responsabilidad de cada uno de los accionados.

De otra parte, el despacho determinó que de los hechos de la demanda se observaba que la persona a la que mayor responsabilidad se endilgaba era a Ana Lucía Giraldo Ochoa, no obstante, no había sido demandada bajo el argumento de que ésta no poseía bienes; circunstancia que no era admisible pues la demanda debía dirigirse frente a todas las personas a las que se les endilgaba responsabilidad, tuviesen o no dinero para pagar. Adicionalmente, el juzgado de instancia requirió al apoderado judicial de los demandantes para que aclarara por qué había pretendido el pago de perjuicios morales, pese a que, en el poder otorgado no se le facultó para tal fin. A lo que el profesional del derecho contestó que los perjuicios morales estaban inmersos en toda la demanda de responsabilidad civil, sin embargo, sostuvo que se atendía a lo que el despacho decidiera. En virtud de lo anterior, el *a quo* decidió que dicha respuesta no era de recibo porque las pretensiones en esta clase de procesos debían estar claramente señaladas en la demanda y sustentadas en los hechos de la misma.

Así las cosas, el fallador de primer nivel concluyó que ninguna claridad hizo la parte demandante respecto a las exigencias que se le hizo, las pretensiones no estaban claras, ni debidamente sustentadas en los hechos. Definió que los demandantes no indicaron lo que cada demandada debía pagar ni por qué, ni a quién y en qué proporción se debía efectuar tales pagos, tal situación no solo dificultaría la toma de una decisión en la sentencia, sino que, además va a impedir que los demandados se defiendan en debida forma. En otras palabras, las pretensiones se hicieron de forma genérica. Afirmó que al tratarse de una acumulación de pretensiones por mejoras y daños causados a la integridad física y mora, se exige mayor diligencia del litigante, para entender la viabilidad de esa acumulación, los hechos que fundamentan una y otra pretensión, la fuente de responsabilidad de uno y otro, las pruebas que sustentan cada pedido; que con ello, cada uno de los demandados conozca claramente de qué

se defiende y cómo lo puede hacer; igualmente, determinar qué pruebas son procedentes, necesarias y pertinentes, ; como también, que pueda haber un fallo de fondo y congruente con todo lo pedido.

1.2. Inconforme con la decisión, el apoderado judicial del demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, con el fin de que el proveído impugnado fuera revocado y en su lugar se admitiera la demanda y se diera curso al proceso.

Para tal efecto, sostuvo que la demanda había sido presentada en tres ocasiones y ha sido rechazada pues cada vez que se subsana los requisitos en la nueva demanda, el despacho encuentra otros requisitos como falencia de la misma y con requisitos que no son sustanciales. Anotó que, respecto de la solicitud de pagos por la merma de capacidad laboral, en la prueba pericial médica están los mismos rubros explicados por el perito. En relación con las mejoras, señaló que el juzgado no se fijó en la pericia y argumentos expuestos en la demanda, inclusive, precisó que ello no eran requisitos sustanciales y de conformidad con las pruebas se hizo un aproximado que el juez finalmente tasaré o no concederá. Adujo que el fallador valoró las pretensiones de fondo cuando pidió que se le indicara el porcentaje en que cada uno de los demandados incidió en la salud mental de los demandados, lo cual se logra con la apreciación de las pruebas y no es el momento procesal para que se valoren las conclusiones de los peritos. Finalmente, en lo atinente al poder otorgado por los demandantes, apuntó que con el poder genérico podría presentar demandas, pruebas y solicitar las pretensiones subyacentes.

1.3. En auto de 31 de enero de 2023 el Juzgado 002 Civil del Circuito de Envigado resolvió el recurso de reposición de manera desfavorable y concedió la alzada.

Como cimiento de lo anterior consideró que, la parte demandante pretende que se declare responsables a todos los demandados y en forma solidaria, de todos los perjuicios materiales y morales que han sufrido por la merma de su capacidad laboral y, además, que se les pague unas mejoras, y así, solicitaron una indemnización de dinero para cada uno de los demandantes, la cual no es igual para cada uno, pero aunque dice que la responsabilidad de los accionados respecto de esos perjuicios, es solidaria, de los hechos del libelo genitor se desprende que no lo es, es decir, sí es verdad que los demandantes han sufrido esos perjuicios, los mismos no han sido causados en igual proporción por los demandados, inclusive, quien sería la principal responsable en la provocación

de esos supuestos perjuicios, ni siquiera es demandada bajo el argumento de que no tiene dinero.

Así las cosas, ultimó que de la forma como estaba planteada la demanda, y concretamente las pretensiones, era muy difícil que los demandados se pudieran defender, pues ellos en ningún momento sabrían qué es lo que se les endilga y, de acuerdo con ello, cuánto les correspondería pagar, y lo mismo ocurriría con el fallador, pues la final, conforme a la práctica de las pruebas, eventualmente se establecería la responsabilidad, sin embargo, no tendría forma de señalar cuál fue el perjuicio sufrido por cada uno de los demandantes, quién lo causó, en qué proporción, y en qué proporción deberá pagar cada uno de los demandados.

## CONSIDERACIONES

2.1. El artículo 82 del Código General del Proceso prescribe los requisitos de la demanda.

*"ARTÍCULO 82. REQUISITOS DE LA DEMANDA. Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos:*

- 1. La designación del juez a quien se dirija.*
- 2. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos será el número de identificación tributaria (NIT).*
- 3. El nombre del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso.*
- 4. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.*
- 5. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.*
- 6. La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder, para que este los aporte.*

*7. El juramento estimatorio, cuando sea necesario.*

*8. Los fundamentos de derecho.*

*9. La cuantía del proceso, cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite.*

*10. El lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales.*

*11. Los demás que exija la ley.”*

2.2. A su vez, el artículo 90 del estatuto procesal establece las causales de admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. Al respecto, en la norma en cita señala:

*"ARTÍCULO 90. ADMISIÓN, INADMISIÓN Y RECHAZO DE LA DEMANDA. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. En la misma providencia el juez deberá integrar el litisconsorcio necesario y ordenarle al demandado que aporte, durante el traslado de la demanda, los documentos que estén en su poder y que hayan sido solicitados por el demandante.*

*El juez rechazará la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia o cuando esté vencido el término de caducidad para instaurarla. En los dos primeros casos ordenará enviarla con sus anexos al que considere competente; en el último, ordenará devolver los anexos sin necesidad de desglose.*

*Mediante auto no susceptible de recursos el juez declarará inadmisibile la demanda solo en los siguientes casos:*

*1. Cuando no reúna los requisitos formales.*

*2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley.*

*3. Cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos legales.*

*4. Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante.*

*5. Cuando quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo proceso.*

*6. Cuando no contenga el juramento estimatorio, siendo necesario.*

*7. Cuando no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.*

*En estos casos el juez señalará con precisión los defectos de que adolezca la demanda, para que el demandante los subsane en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo. Vencido el término para subsanarla el juez decidirá si la admite o la rechaza”.*

2.3. En relación con la formulación de las pretensiones, el doctrinante Henry Sanabria Santos en su obra "*Derecho procesal civil general*" señala lo siguiente:

*"De acuerdo con lo señalado por el numeral 4 del artículo 82 del CGP, las pretensiones deben formularse con precisión y claridad; es decir, el demandante debe ser bastante puntual y concreto en la formulación de sus pretensiones y evitar con ello que sean confusas, contradictorias e ininteligibles, de suerte que con una simple lectura se conozca, sin que haya lugar a dudas, qué es lo que busca el demandante con dichas súplicas.*

*Una pretensión formulada con vaguedad, ambigüedad, indeterminación, cuya redacción sea enredada, repetitiva, que revuelve y entremezcla unas cosas con otras, no le va a permitir al juez conocer con certeza el contenido, objeto y alcance de ella; además, le va a generar serias dificultades al demandado en el ejercicio del derecho de defensa. La importancia de redactar de forma adecuada las pretensiones es innegable, hasta el punto de que es frecuente en la práctica escuchar a quienes con razón afirman que el primer paso que debe dar el demandante para ganar el proceso es formular bien sus pretensiones y evitar que sean confusas e imprecisas.*

*Por ello, al estudiar la admisibilidad de la demanda le corresponde al juez hacer un estricto control sobre el cumplimiento de ese requisito y exigir*

*una adecuada formulación de las pretensiones; de no hacerlo, seguramente el demandado se verá en aprietos para ejercer en forma adecuada su derecho de defensa, pues en la contestación de la demanda se le exige hacer un pronunciamiento concreto sobre las pretensiones, y si ellas no han sido formuladas como corresponde, seguramente el demandado pondrá de presente esa imprecisión por medio del recurso de reposición en contra del auto admisorio de la demanda o de la correspondiente excepción previa”.*

### CASO CONCRETO

En el caso bajo examen, el recurso formulado plantea resolver si el juez de primer grado tuvo razón al rechazar la demanda, por cuanto, concluyó que el libelo genitor carecía de uno de los requisitos formales de la demanda, como lo es la formulación de pretensiones, expresadas con precisión y claridad.

Dicho lo anterior, esta dependencia judicial considera que lo definido por el fallador de primer nivel se encuentra ajustado a derecho, en tanto, del análisis de la demanda se infiere que la formulación de pretensiones no se hizo de una manera adecuada, por lo tanto, en una primera oportunidad se inadmitió la demanda para subsanar tal yerro, sin embargo, con el memorial de subsanación no se ofreció mayor claridad, por lo que la decisión de rechazo de la demanda se encuentra debidamente fundamentada.

Así las cosas, de la revisión del expediente se observa que, en efecto, el extremo procesal activo formuló las siguientes pretensiones:

*"PRIMERA: Declarar que los demandados son solidariamente responsables de todos los perjuicios materiales y morales ocasionados a cada uno de los demandantes por la merma de su capacidad laboral y ocupacional y por reparaciones y mejoras en el inmueble que habitan.*

*SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior:*

*A. Se condene a los demandados a pagar a los demandantes la suma de dinero o lo que se demostrare en el proceso así:*

*I. A Pedro Montoya González \$42.469.131,58*

*II. A Carlos Antonio Montoya González \$61.379.548,15*

*III. A Rosana Montoya González \$40.335.586,60*

*IV. A Jairo de Jesús Montoya Giraldo \$117.079.200*

*V. A María Ofelia González \$31.079.417,67*

*B. Que se condene a los demandados a pagarles a los demandantes todos los perjuicios materiales por las reparaciones y mejoras que éstos realizaron en el inmueble ubicado en la calle 43B No. 32 sur 23, con matrícula inmobiliaria número 001-463117, de la oficina de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur, de conformidad con la peritación anexa, con planos y registros fotográficos de las obras, efectuadas por perito ingeniero auxiliar de justicia por valor de \$151.750.626.*

*C. Que se condene a los demandados a pagarles a cada uno de los demandantes la cantidad de mil (1.000) gramos oro por los perjuicios morales que se les ocasionaron, o lo que el señor Juez determine.*

*D. Que se condene en costas a los demandados”.*

Debido a lo anterior, el *a quo* en auto de 16 de mayo de 2022 requirió al apoderado judicial del demandante para que aclarara en relación con el valor de las mejoras, cuánto debía pagarse a cada demandante y cuánto a cada uno de los demandados; también le exigió explicar por qué se demandaba en igualdad de condiciones a seis personas para el pago de indemnizaciones y perjuicios de manera solidaria, cuando de los hechos de la demanda se evidenciaba que no todos tenían la misma responsabilidad en los daños causados a los demandantes; de igual modo, el juez de instancia le pidió aclarar por qué Ana Lucía Giraldo Ochoa no había sido convocada como demandada, pese a que, de los hechos de la demanda se observaba que fue una de las personas que más actos cometió en contra de los demandantes y que dieron lugar a los perjuicios e indemnizaciones que se pretendía cobrar.

Frente a tales exigencias, la parte demandante no ofreció mayor claridad, pues no determinó por qué pretendía la declaratoria de responsabilidad civil extracontractual de forma solidaria, como tampoco precisó el valor que debía recibir cada demandante por concepto de perjuicios materiales, morales y por pago de mejoras, ni tampoco en qué porcentaje le correspondía pagar a cada demandado, sobre todo porque de los hechos de la demanda se desprende que los perjuicios no fueron causados en igual proporción por los accionados, ello aunado a que, la persona quien sería la principal responsable de los hechos dañosos, no fue demandada bajo el argumento de que no tenía dinero.



Así las cosas, lo concluido por el juez al indicar que de la forma en que fue planteada la demanda y concretamente las pretensiones, resultaría muy difícil que el extremo procesal pasivo pudiera defenderse, pues no podría saber cuál es la responsabilidad que se le endilga a cada uno, y conforme con ello, cuánto sería el valor que les correspondería pagar. De igual modo, el despacho no tendría forma de precisar cuál fue el perjuicio sufrido por cada uno de los demandantes, quién lo causó, en qué proporción y cuánto sería el valor a pagar por tal concepto a cada uno de los demandados. Acierta también el *a quo* al señalar que las pretensiones formuladas involucran la declaración de una responsabilidad civil, el pago de unos perjuicios morales, materiales y mejoras, solicitudes que están dirigidas frente a un número plural de personas que, de acuerdo a los hechos de la demanda, presuntamente no tienen el mismo grado de participación en la generación del daño, inclusive, una de las posibles responsables, ni siquiera fue demandada.

En consecuencia, la decisión proferida en auto de 1 de julio de 2022 será confirmada.

Por lo expuesto, el Despacho RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión adoptada en auto de 1 de julio de 2022.

SEGUNDO. Sin condena en costas por cuanto no se causaron.

NOTIFÍQUESE

  
MARTHA CECILIA LEMA VILLADA  
Magistrada